

## MEMORIA FINAL DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Expte.: 14 /2025

Rª.: ACD/LGV/EMS/rmg/emg

**Asunto: Anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa.**

### ANTECEDENTES.

En virtud de Resolución 1768/2025, de 25 de julio, el Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de Gobierno, encomendó al Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría General Técnica de dicha Consejería, la elaboración del Anteproyecto de Ley de referencia.

De conformidad con el artículo 11.3 del Decreto 51/2023, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía de Gobierno, corresponde a la Secretaría General Técnica, a través de la unidad que proceda, en este caso el Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos, la elaboración de disposiciones de carácter general en materia de organización, el impulso y la coordinación general de la política de mejora de la calidad de los servicios públicos, así como el diseño, impulso y coordinación de las actuaciones para mejorar la calidad normativa, reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos. Existe por tanto competencia del órgano que tiene atribuida la competencia, para impulsar la tramitación de la norma.

Con la elaboración de este anteproyecto de Ley se pretende proporcionar a la Comunidad Autónoma de La Rioja un instrumento de rango legal que recoja los compromisos de simplificación administrativa y de calidad normativa acordes con los estándares actuales en las administraciones de nuestro entorno, y que quedaron plasmados en el Plan de Simplificación administrativa, Calidad normativa y Mercado abierto (BOR de 22 de abril de 2025), cuyo fin último consiste en agilizar las relaciones con la ciudadanía y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Una de las medidas de dicho Plan es la de elevar al Parlamento de La Rioja un proyecto de Ley que sienta los principios y las obligaciones generales de la política de simplificación y calidad normativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Una vez realizados, como luego se dirá los trámites de consulta previa, trámite de audiencia, y elaborado el borrador y la memoria justificativa, ha sido remitida al Servicio de Planificación y Ordenación Jurídica para su tramitación reglamentaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2025/0833109
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico				
2				

El Anteproyecto remitido para tramitación, parte de la ya superada técnicamente Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa, que, más de diez años después de su entrada en vigor, resultaba necesario actualizar, para dar cabida a las nuevas expectativas de la ciudadanía y los operadores económicos, en sus relaciones con la Administración, pero también para servir de nuevo marco regulatorio para la propia administración.

El artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente (...)”. En el caso de la elaboración de disposiciones generales, el artículo 33 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja señala que “El procedimiento para la elaboración de las leyes se iniciará siempre mediante resolución del consejero competente por razón de la materia”.

El órgano proponente ha remitido la resolución de inicio del expediente de elaboración de la norma dictada por el titular de la Consejería como ya se ha indicado, una memoria justificativa con estudio de impacto económico, impacto de género, análisis de simplificación y cargas y borrador del anteproyecto de Ley que se quiere someter a la aprobación del Gobierno para su posterior remisión al Parlamento de La Rioja, así como justificación del cumplimiento de los trámites de Consulta Previa y de Audiencia, con el resultado que consta en la memoria justificativa de la unidad que ha elaborado el borrador, y a la que nos remitimos por economía procedimental en el apartado correspondiente.

La Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de La Rioja aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, en sus artículos 8. uno.1 y 8. uno.2 dispone de competencias exclusivas en materia de “organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno” y de “procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja” junto a otras sobre las que inciden las medidas previstas en la presente ley, de las que cabe destacar la relativa a “ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma”.

En el artículo 31 cinco del citado texto estatutario se incide, de nuevo, sobre dicha esfera competencial señalando que corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias el régimen jurídico administrativo derivado de las competencias asumidas.

Sobre este marco competencial, y sin olvidar la competencia atribuida al Estado en el artículo 149.1. 18ª de la Constitución Española para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la regulación del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, se ha redactado el borrador.

Por otro lado, la Ley Estatal 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado impulsó un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas mediante la simplificación de la legislación existente, la eliminación de regulaciones innecesarias, el establecimiento de procedimientos más ágiles y la minimización de las cargas

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 2 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

administrativas, que deber tener traslación en la actuación de la Administración autonómica, como resulta del Plan de Simplificación ya citado.

Nuestra Comunidad Autónoma, señala la memoria justificativa “se encuentra ahora en un momento crucial que requiere una apuesta firme por la simplificación administrativa y la mejora regulatoria para estimular la recuperación económica y enfrentar los desafíos del futuro. En un entorno actual globalizado y altamente competitivo, de incertidumbre y volatilidad económica, es fundamental que el Gobierno regional adopte medidas proactivas con el objetivo de fomentar la inversión, impulsar la innovación y promover la prosperidad económica y social”.

Esta es por tanto la premisa, y el marco de diseño de la Ley de Simplificación Administrativo, Mercado Abierto y Calidad Normativa.

Pero si importantes son las medidas de simplificación y de mercado abierto, no lo son menos las propuestas relativas a la mejora de la calidad normativa, que va a obligar a la administración autonómica, a una evaluación ex ante y ex post de los efectos previstos por cada norma y su consecución o no tras la aprobación y entrada en vigor.

Igualmente se pretende mejorar la calidad normativa, mediante la introducción de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que va a exigir un análisis riguroso, no sólo de simplificación, sino también económico, social y presupuestario, que permita la toma de decisiones durante la redacción, con datos e información basadas en evidencias.

Para lograrlo se modifica el Capítulo I del Título III de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, relativo a la *iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria*.

Para la implantación efectiva de las medidas, la Ley recoge la necesidad de un cambio en el funcionamiento de la Administración, lo cual exige la implicación y colaboración de todos los niveles de la organización, por lo cual la Ley establecerá medidas de participación para las personas de la organización directamente implicadas en su funcionamiento, pero también se contará con la participación, cuando sea necesario de las organizaciones sociales y empresariales.

El ambicioso proyecto que supondrá la aplicación de la Ley, exigirá un esfuerzo individual y colectivo, en el que la organización administrativa y la sociedad en general estarán afectados, y se enfrentará a un reto tecnológico en su propio funcionamiento.

## MEMORIA ECONÓMICA.

La memoria justificativa contiene un apartado que denomina estudio presupuestario y económico, en el que se indica que la aprobación de la Ley no conllevará costes directos para el Gobierno, pues las medidas se pondrán en marcha con recursos propios.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2025/0833109
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

El coste asociado a las medidas de transformación digital, según la memoria económica de la Dirección General para la Sociedad Digital de fecha 13 de marzo de 2025, que se incluyó en la tramitación del Plan de Simplificación aprobado el pasado mes de abril, se estimaba en una cantidad total de 3.109.912,36 € (se incorpora como documentación adicional la memoria citada).

## MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

Señala la memoria justificativa, en un apartado de la misma, que no se aprecia impacto por razón de género al tratarse de una norma de carácter técnico-procedimental, incorporando además lenguaje inclusivo y no sexista, sin perjuicio de los efectos positivos que la aplicación de la Ley una vez aprobada pueda tener en las modificaciones normativas que se tramiten.

El dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja D. 59/23, de 18 de octubre, en su Fundamento Jurídico 3-6, ha señalado la obligatoriedad de incorporar el informe de impacto de género que exige el artículo 22.1 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, manifestándose en los siguientes términos:

*“El tenor del citado art. 22.1 —que está en vigor— deja clara la obligación de incorporar un informe de impacto de género en todos —porque ninguna exclusión o excepción prevé la Ley— los proyectos de disposición general, de suerte que su ausencia podría fundamentar la impugnación y eventual anulación judicial de éstos. Pero, es más, la propia Ley, en el párrafo segundo del citado precepto, establece ya un contenido mínimo de tales informes, descartándose así una eventual justificación de la omisión de este informe basado en la imposibilidad de determinar su contenido hasta que exista un desarrollo reglamentario específico.*

*La Disposición Adicional segunda introduce un mandato al Gobierno para, en un plazo de dos años, aprobar las “normas o directrices en las que se establezcan las pautas a seguir para la elaboración del informe de impacto de género, así como su contenido”. No se trata de una disposición transitoria que demore la efectividad de la regulación del actual artículo 22.*

(...)

*Por más que sea obvia la falta de trascendencia o proyección de la norma en este ámbito, ello debería incluirse en un informe fechado y firmado, y, tal y como ha señalado recientemente el TS (cfr. Sentencia 1039/2023, de 19 de julio), la referida inexistencia de impacto debe ser consecuencia de un análisis real previo del mismo. Si se realizó tal análisis, “los informes ‘neutros’ no serán equivalentes a inexistentes; por el contrario, cuando pueda inferirse que se ha utilizado una formula rituarial para afirmar la neutralidad de la norma a esos efectos, pero que no ha existido realmente un análisis sobre el particular, esos informes deben reputarse inexistentes”.*

Ello sentado, en el caso que nos ocupa, pese a la parquedad del análisis efectuado y, como hemos advertido, su inadecuada formalización —aspectos éstos que deberían corregirse en un futuro—, puede entenderse que tal análisis se

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 4 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

ha realizado o existido, teniendo presente que estamos ante una modificación normativa nimia, cuya neutralidad o nula repercusión en materia de igualdad de género resulta patente, sin necesidad de realizar un examen más detallado.”

El artículo 22.1. de la citada Ley indica que “La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja incorporará un informe de impacto de género en los proyectos de leyes y reglamentos y en los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno para garantizar la incorporación del principio de igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Dicho informe contendrá, como mínimo, la estimación del impacto potencial del proyecto normativo en las mujeres y hombres, el análisis de las repercusiones positivas o adversas en materia de igualdad de la actividad proyectada, así como las medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten, promoviendo de este modo la igualdad.”

En cuanto a la formalización del análisis en un informe separado y autónomo del cuerpo principal de esta memoria, tal exigencia no se deduce de la redacción del artículo 22.1 de la Ley 7/2023. Son múltiples los contenidos que deben acompañar a una norma, y resulta válido hacerlo de forma autónoma o agrupándolos en un solo documento.

Como ejemplo, la memoria económica del coste, que es exigible en las normas con repercusión económica, puede incorporarse como un apartado más de la memoria justificativa o como un documento aparte, sin que ello implique que una solución sea más válida que otra. Lo mismo puede decirse acerca del estudio de cargas administrativas, que puede incorporarse como documento autónomo o como un apartado en una memoria justificativa o en la memoria de tramitación del expediente o incluso, como apartado de un informe de otro órgano.

La exigencia de emisión de un informe como documento autónomo o como contenido de otro informe o memoria viene marcada, antes que, por el contenido del mismo, por dos circunstancias:

- 1) Que el órgano que debe emitirlo sea distinto del que ha emitido los otros informes y memorias (señaladamente, en nuestra administración, tienen la consideración de informe autónomo dentro de procedimiento de elaboración de disposiciones generales los informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, del SOIESP, de la Dirección General de Control Presupuestario, de Intervención General, ...)
- 2) Que la emisión de esos informes, aunque deben ser emitidos por el mismo órgano, obedezcan a distinto contenido y a distinta fase del procedimiento. Así, por ejemplo, en los sucesivos informes y contra informes de Intervención General y del centro gestor dentro del procedimiento de levantamiento de reparos, o en las diferentes versiones de las memorias de tramitación de la SGT en los procedimientos de elaboración de las disposiciones de carácter general.

Dado que el artículo 22 de la Ley 7/2023 no señala el órgano que debe emitir ese informe de impacto de género, debe considerarse que el análisis que exige puede ser realizado indistintamente por el órgano que elabora la memoria justificativa, como sucede en el presente caso, o por el órgano que tramita la disposición general, o incluso que con carácter general ser atribuyera a un órgano *ad hoc*.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 5 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

La memoria justificativa que acompaña al borrador tiene un contenido necesario –“acerca de la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el marco normativo en que se inserte, una relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación. Incluirá también, en su caso, los estudios e informes previos que le sirvan de fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren necesarios en la tramitación del expediente”-. Pero no existe ni limitación ni prohibición legal de añadir otro contenido adicional y complementario –jurisprudencia, doctrina administrativa, negociación con representantes de los trabajadores, cuestiones sobre protección de datos, referencia a la tramitación paralela de actos o normas complementarias, ...-, según resulte adecuado o necesario a juicio de su titular, a la luz de las circunstancias, para la mejor justificación y tramitación de la norma.

En consecuencia, por cuestiones de economía procedimental, se considera plenamente válido que se haya dado cumplimiento a la exigencia legal incorporando dicho análisis sobre igualdad entre hombres y mujeres en la memoria justificativa en vez de elaborar un informe autónomo, al menos en tanto en cuanto la Ley o su reglamento de desarrollo si llegara a aprobarse no indiquen expresamente lo contrario.

## CONTENIDO.

El Anteproyecto de Ley se estructura en una exposición de motivos, siete títulos, sesenta y un artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, según se detalla con mayor precisión en la memoria que acompaña al anteproyecto y a cuyo contenido nos remitimos.

## INCIDENCIAS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO Y LA REDACCIÓN DEL BORRADOR

Debemos señalar a este respecto que, en fase de revisión del proyecto en el Servicio de Planificación y Ordenación Jurídica de la Secretaría General Técnica, se puso en conocimiento la Dirección General de Sociedad Digital y de la Unidad redactora del texto normativo una duda relativa a la redacción y contenido del apartado 2 del artículo 44.

El apartado 2, en la redacción del borrador nº 2 señalaba lo siguiente:

“2. En las oficinas de atención a la ciudadanía se facilitarán los medios técnicos necesarios para que la ciudadanía pueda relacionarse digitalmente con la Administración autonómica. Así mismo, se garantizará la posibilidad de que las personas interesadas puedan ser guiadas por personal especializado”.

La redacción literal del precepto parece obligar a que en las oficinas de atención a la ciudadanía existan ordenadores a disposición de los ciudadanos para que puedan realizar sus gestiones de manera electrónica, llegando incluso a instalar su firma electrónica en equipos de la administración.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 6 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

Esta previsión, en el momento actual de desarrollo electrónico de los procedimientos y con la tecnología, supone un riesgo en términos de seguridad e incluso de privacidad. Ello no significa que tras la implantación del proyecto GLERA y la evolución de los sistemas de acceso e identificación, no exclusivamente con firma digital, así como la existencia de nuevas herramientas tecnológicas, esta posibilidad esté garantizada.

Por esta razón se ha optado por suprimir el párrafo 2, anteriormente citado (renumerando el párrafo tercero que pasa a ser el segundo) e introducir una nueva Disposición adicional séptima, por la que se atribuye a la consejería competente en atención a la ciudadanía, en coordinación con la competente en administración electrónica, la facultad para poner a disposición de la ciudadanía, nuevos canales, herramientas y medios técnicos para relacionarse con la administración autonómica.

## INFORMES Y TRÁMITES.

### 1) Consulta previa.

El trámite está regulado en el artículo 32 bis de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico, que contempla en su apartado 2 las excepciones a la exigibilidad de este trámite.

Dado que la norma que preveía tramitarse, no estaba incurso en las excepciones de dicho apartado, se sustanció una consulta previa, entre los días 25 de abril y 16 de mayo, con el resultado que obra en la página 10 de la memoria justificativa.

### 2) Resolución de inicio.

El artículo 33.1 de la Ley 4/2005 dispone que el procedimiento para la elaboración de las leyes se iniciará siempre mediante resolución del consejero competente por razón de la materia. La resolución de inicio fue firmada por el titular de la Consejería, como ya se ha indicado.

### 3) Borrador inicial.

El borrador inicial, tal y como señala la memoria, se realizó tras un análisis de las normas aprobadas sobre las materias objeto de regulación en los últimos tiempos, por otras Comunidades autónomas.

Igualmente fueron tenidas en cuenta las alegaciones recibidas en el trámite de consulta previa, así como una serie de propuestas recibidas en el marco de la Mesa de simplificación administrativa constituida de conformidad con las previsiones del Plan de Simplificación ya citado.

Nos remitimos a la memoria justificativa para conocer el contenido, alcance y aceptación o rechazo de las propuestas de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Asociación Riojana de Empresas familiares (AREF) y Lideremos La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 7 / 15
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

#### 4) Trámite de audiencia.

El borrador inicial fue sometido al trámite de audiencia mediante su publicación el Portal del Gobierno de La Rioja durante los días 4 a 25 de agosto.

El trámite resultaba necesario a tenor de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 4/2005 ya citada, pues la norma que se pretende aprobar afecta a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía.

En el trámite de audiencia únicamente se recibió una alegación, que se encuentra inserta en el certificado emitido del cumplimiento del trámite, y a la que se da respuesta en la Memoria.

En este momento procedimental, aunque fuera del plazo establecido al efecto, y fuera igualmente del conducto establecido, el sindicato CCOO, mediante instancia general, formuló una serie de propuestas, que, a pesar de no existir obligación legal de ser tenidas en cuenta, por haberse emitido fuera de plazo, son analizadas por la unidad redactora, reflejando el análisis en la memoria justificativa.

#### 5) Memoria justificativa.

Tras el trámite de audiencia se ha elaborado el borrador número 2, que es el que se tramitará con la modificación introducida, de conformidad con el apartado **INCIDENCIAS** de esta memoria de tramitación.

#### 6) Memoria de tramitación de la Secretaría General Técnica de la Consejería.

La presente memoria se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.h) de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

#### 7) Diligencia de formación del expediente.

Esta SGT dictará a continuación diligencia teniendo por formado el expediente de elaboración del anteproyecto y disponiendo los trámites que habrán de evacuarse a continuación, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 4/2005.

#### 8) Otros informes y trámites preceptivos:

Se considera preceptiva la emisión de los siguientes informes durante la tramitación de este Anteproyecto:

1) Informe de la Dirección General de Control Presupuestario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.i) del Decreto, a cuyo tenor es una de sus competencias emitir "Informe sobre anteproyectos de Ley, proyectos de disposiciones generales y planes generales que impliquen aumento o disminución de los ingresos y gastos públicos, o afecten a medios de pago, y sobre toda propuesta de la que puedan derivarse consecuencias económicas en materia de sistema

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 8 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			



retributivo y costes de personal.” El anteproyecto tiene un coste estimado de 3.109.912,36 €, por lo que en principio debería solicitarse informe de la mencionada DG.

No obstante, este coste, que como ya hemos indicado en el apartado correspondiente de esta memoria, ya fue informado por la DG de Control Presupuestario con ocasión de la aprobación de Plan de Simplificación, por lo que se incorpora el informe de 1 de abril de 2025 al expediente de tramitación de la Ley, dándose por cumplido el trámite.

2) Informe del Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos. Este Servicio debe emitir informe según el Decreto 125/2007, de 26 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de organización administrativa, calidad y evaluación de los servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Rioja y sus Organismos Autónomos, informando con carácter preceptivo toda disposición general que suponga la creación, modificación o extinción de órganos o de procedimientos, por lo cual su informe resultaría preceptivo.

No obstante, y teniendo en cuenta, que es precisamente este Servicio el redactor de la norma y quien ha elaborado la memoria justificativa, se da por cumplido el trámite, como se refleja en la propia memoria.

3) La Dirección General de los Servicios Jurídicos debe emitir informe sobre el texto completo de la Ley, con carácter preceptivo y último en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 8.1.c) y 12 del Decreto 21/2006, de 7 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

La mencionada DG realiza un informe, en el que analiza diferentes aspectos tanto competenciales, como de cumplimiento de trámites, como especialmente, del propio contenido de la norma.

Así y en lo relativo a aspectos como la competencia de la Comunidad Autónoma para regular la materia, concluye que existe competencia para dictar la presente norma al amparo de las previsiones competenciales contenidas en la L.O 3/1982, de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de La Rioja, recomendando que, entre los títulos competenciales, se cite también el del fomento de desarrollo económico (artículo 8.uno.4), lo cual se lleva a efecto.

Respecto al contenido de trámites, señala la contradicción en la redacción de la memoria de la SGT y de la unidad proponente en lo relativo a la existencia o no, de costes derivados de la aprobación de la norma.

En relación con este aspecto, hay que señalar, que la norma contiene una serie de medidas que no generarán coste, ya que efectivamente la revisión de procedimientos se realizará a través de medios propios, dentro de las funciones habituales del personal de las diferentes unidades administrativas.

Pero no es menos cierto, que la puesta en marcha de otras medidas, contenidas en la ley, y ya previstas en el Plan de simplificación, íntimamente unido a esta Ley, fundamentalmente las ligadas a la transformación digital, si implican un

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 9 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

importante coste económico, que ya fue puesto en conocimiento e informado por la DG de Control Presupuestario, cuyo informe se adjunta, con ocasión de la tramitación del mencionado Plan, no existiendo otros costes que los ya informados, por lo que se considera innecesario volver a solicitar un informe sobre la misma materia y con el mismo contenido.

Finalmente, el informe realiza una serie de observaciones al articulado, que relacionamos seguidamente, indicando si han sido aceptadas, e incorporadas al texto final o si por el contrario no se incorporan y las razones por las cuales no se atiende la propuesta de la DG de Servicios Jurídicos, para lo cual se han realizado reuniones de trabajo entre el personal del Servicio de Planificación y ordenación Jurídico y el del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos.

1. La Exposición de Motivos se refiere erróneamente a la derogación de la Ley 4/2005 cuando debería hablar de la nueva redacción del Capítulo I de su Título III.

Se atiende a la propuesta incorporando la siguiente redacción:

*“La disposición transitoria regula cómo deben elaborarse las Memorias que acompañan a los proyectos normativos desde la entrada en vigor de la nueva redacción de la Ley 4/2005 hasta la aprobación de las Directrices de elaboración de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo previstas en la Disposición Adicional Cuarta”.*

2. En el artículo 2, en su último párrafo, se sugiere incluir al principio “A los efectos de esta ley”. En realidad, la redacción quizá no demasiado afortunada, dejaba claro que sólo era aplicable a los órganos y entidades sujetos a este ámbito de aplicación, es decir al que indicaba el apartado 1.

No obstante, como la redacción del informe clarifica el apartado, se atiende la misma y se da nueva redacción.

*“A los efectos de esta Ley, para referirse a los órganos y entidades señalados en el párrafo anterior se utilizará en adelante la expresión la Administración autonómica.”*

3. Tanto en el título de la Ley como en su exposición de motivos y artículos 6 y 7, se habla de Mercado abierto sin que se concrete cuál es su concepto, se sugiere la conveniencia de recoger un concepto legal.

Se atiende a la propuesta, incluyendo en la Exposición de motivos, en el décimo párrafo del apartado III, una explicación del significado del concepto mercado abierto, de la siguiente forma:

*“El Título III regula el mercado abierto conforme al modelo iniciado por la Ley 6/2022, de la Comunidad de Madrid e incorporado al ordenamiento jurídico de otras Comunidades Autónomas en sus leyes más recientes. El mercado abierto tiene por objeto garantizar la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En concreto, tiene como finalidad reducir trabas innecesarias a los operadores económicos, permitiendo, con carácter general, su libre desplazamiento a nuestro territorio para ejercer su actividad sin necesidad de acreditar los requisitos previstos en la normativa autonómica, siempre que estén establecidos legalmente en territorio nacional. Ello se consigue mediante el reconocimiento automático de licencias u otras validaciones otorgadas en la Comunidad Autónoma de origen”.*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 10 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

4. En el artículo 9.3, se sugiere hablar de Consejero competente en lugar de Consejería y se plantea la conveniencia de que se resuelva a propuesta del grupo de trabajo ya que este es parte en la discrepancia.

Se admite la propuesta.

5. Artículo 13. En su apartado 2, se sugiere introducir al inicio “Salvo que una norma con rango de Ley establezca lo contrario, como regla general...”

Se considera innecesario introducir dicha previsión porque se está estableciendo una regla general en cuanto al momento de presentación de la documentación con el fin de evitar cargas innecesarias.

En su apartado 3, al referirse a la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, señalar que es la 39/2015, de 1 de octubre.

Se admite la propuesta y se incluye la cita completa de la Ley.

6. Artículo 16. Se sugiere que se introduzca “procedimientos competencia de la Administración autonómica iniciados a solicitud del interesado...”.

No se admite la propuesta por considerarla innecesaria dado que la Ley determina su ámbito de aplicación, y sería imposible que fuera aplicable fuera del marco autonómico.

7. Artículo 19. Se sugiere en su apartado 2 que se inicie con la expresión “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.5 cuando en un procedimiento...”.

Se admite la propuesta, de forma que el apartado 2 del artículo 19 queda redactado como sigue:

*“2. Transcurrido el plazo máximo de emisión sin pronunciamiento expreso del informante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.5 de esta Ley, el órgano competente pondrá en conocimiento de la Delegación del Gobierno en La Rioja esta circunstancia y los efectos económicos derivados de la ausencia o demora en la emisión del informe, e informará de esta circunstancia al promotor.”*

8. Artículo 20.1, referirse a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

Se admite la propuesta de forma que la cita a la Ley se refleja conforme a las directrices de técnica normativa para las citas posteriores, de la siguiente forma “Ley 20/2013, de 9 de diciembre”.

9. Artículo 21. En su apartado 3, si el régimen general (apartado 1) es de declaración responsable o comunicación, no parece que deba de ser necesaria la motivación en estos casos.

Se admite parcialmente.

La regla general no es la declaración responsable o comunicación, sino la libertad de establecimiento, como se determina en el artículo 20, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que para cualquier tipo de intervención administrativa (autorización,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 11 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

declaración responsable o comunicación) exigen la existencia de alguna razón imperiosa de interés público y la proporcionalidad, justificadas en las Memorias de las respectivas normas reguladoras.

No obstante, lo anterior, se considera más oportuno incluir la previsión de esta motivación en el artículo 20 en un nuevo apartado 3 del mismo y eliminándola del artículo 21, pasando a renumerar el apartado siguiente de este artículo.

10. Artículo 24.4. Es reiterativo del 23.2 cuando dice que las funciones de las entidades colaboradoras de certificación no sustituirán a las potestades propias de la Administración. Se sugiere que diga simplemente que la Administración podrá verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas.

Se admite la propuesta y se elimina el apartado 4 del artículo 24, pasando a renumerar los apartados siguientes.

11. Artículo 25. En sus apartados 2 a y b), parece que los colegios profesionales están incluidos en el b) como personas jurídicas que son. ¿No sería más correcto decir que podrán ser acreditadas toda clase de personas jurídicas legalmente constituidas que cumplan con los requisitos del número 3?

Se admite parcialmente la propuesta, quedando la redacción del artículo 25.2 como sigue:

*“2. Podrán ser acreditadas como entidades colaboradoras de certificación:*

*a) Los colegios profesionales, cuyos colegiados ejercientes, individualmente o asociados en las formas que autoricen las normas profesionales, estén legitimados para actuar en el ámbito de competencias profesionales que les confiera legalmente el título que ostenten.*

*b) Aquellas otras personas jurídicas legalmente constituidas que cumplan los requisitos señalados en el apartado siguiente”.*

12. Artículo 27. En su apartado 3. Podría ser contradictorio hablar de régimen de mercado y honorarios por un lado y de tarifas por otro. Plantea la duda de si todas las entidades deben tener los mismos conceptos de tarifas, y en tal caso quién las fija y aprueba. Obviamente la cuantía de la tarifa debe de ser libre si hablamos de régimen de mercado.

No se admite, por no considerarlo contradictorio.

Si bien el término tarifa podría entenderse como un precio fijado por la Administración, no es esta su única acepción, siendo sinónimo de precio. Las tarifas serán fijadas libremente por las propias entidades acreditadas de certificación que deberán comunicarlás a la Administración a los solos efectos de su publicación para conocimiento de los posibles clientes.

13. Artículo 28. Se plantea la conveniencia de extender el régimen de incompatibilidades de los colegiados a los profesionales de las entidades en general.

Se admite, quedando la redacción del artículo 28 como sigue:

*“Artículo 28. Incompatibilidades de las entidades colaboradoras de certificación*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 12 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

1. Las entidades colaboradoras de certificación no podrán tener relación jurídica con las personas, entidades o empresas que los contraten para ejercer sus funciones, o con las que participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que, en cualquier forma, pueda afectar a su objetividad e independencia de criterio. Se considerará que existe tal dependencia, al menos, cuando concurren las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de régimen jurídico del sector público.

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que pudieran concurrir, no producirán efecto las actuaciones o documentos emitidos en ejercicio de sus funciones por las entidades colaboradoras de certificación con infracción de lo establecido en el apartado anterior.

3. Las entidades colaboradoras de certificación podrán exigir en cualquier momento a sus profesionales habilitados declaración o acreditación de que no concurren las circunstancias establecidas en este artículo”.

14. Artículo 29. En su apartado 3 no se entiende porqué la responsabilidad solidaria lo es solo si el profesional al que se le exige seguro de responsabilidad civil profesional actúa certificando en un colegio y no en una empresa.

Se admite, quedando el artículo 29.3 redactado de la siguiente forma:

“3. Cuando actúe un profesional habilitado en cuyo ámbito profesional resulte exigible seguro de responsabilidad civil profesional, la entidad colaboradora de certificación y el profesional serán solidariamente responsables”.

15. Artículo 32: La posibilidad genérica de limitar conforme a lo establecido en la presente Ley podría contravenir la Ley 20/2013. Por otro lado, se plantea la duda de cuáles son las limitaciones se contienen en la presente Ley.

Se admite, quedando el artículo 32 redactado como sigue:

“Artículo 32. Acceso a las actividades económicas y su ejercicio

El acceso a las actividades económicas y su ejercicio solo podrá limitarse conforme a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre y a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales”.

16. Artículo 35. En su apartado 3, se sugiere incluir la protección del medio ambiente.

No se considera apropiada la inclusión ya que todas las limitaciones sólo están ligadas a la protección de las personas en este concreto artículo.

17. Artículo 47. Hablar de entidades colaboradoras de certificación y no de entidades colaboradoras.

Se admite y se modifica el artículo de acuerdo con la propuesta.

18. Artículo 55.3 c) El resarcimiento no es propiamente una sanción sino una consecuencia de la imposición de las sanciones. El decomiso es más dudoso que sea o no sanción (existen sentencias que en el ámbito penal lo consideran así).

Se admite. Se elimina el punto c) como sanción y se incorpora como un apartado 4 con la siguiente redacción:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 13 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

*“4. Como medida complementaria, se podrá imponer el resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención administrativa, a cargo del infractor”.*

19. Artículo 60: Plantea dudas sobre la competencia para iniciar e instruir los procedimientos: hay infracciones no ligadas a la aportación de declaración responsable o comunicación como los incumplimientos de la obligación de confidencialidad o de aseguramiento por parte de las entidades colaboradoras de certificación.

Se admite la propuesta, quedando la redacción del artículo 60 como sigue:

*“Artículo 60. Competencias sancionadoras*

*1. El inicio e instrucción de los procedimientos sancionadores, derivados de las infracciones tipificadas en el artículo 49 a), i) y j) y en el artículo 50 c) corresponderá al órgano directivo competente en la acreditación y registro de las entidades colaboradoras de certificación.*

*2. En el resto de los casos, el inicio e instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá a la Dirección General competente por razón de la materia donde se aporte la declaración responsable o comunicación.*

*3. En la Administración General de la Comunidad Autónoma serán competentes para sancionar:*

*a) Para la imposición de sanciones por infracciones leves, el titular de la Dirección General competente por razón de la materia.*

*b) Para la imposición de sanciones por infracciones graves, el titular de la Consejería competente en materia de simplificación administrativa cuando la infracción sea una de las indicadas en el apartado 1 y el titular de la Consejería competente por razón de la materia, en el resto de supuestos.*

*c) El Consejo de Gobierno para la imposición de sanciones por infracciones muy graves.*

*4. En las entidades del sector público será competente para la imposición de sanciones la persona que ejerza la potestad sancionadora según sus estatutos, salvo que se trate de las infracciones previstas en el apartado 1”.*

20. Disposición Adicional segunda 1: Cuando habla de Consejería competente en materia de organización debería añadir de los servicios públicos.

Se admite y se modifica la Disposición conforme a la propuesta.

Tras la recepción del informe, y en la reunión mantenida para su análisis se ha detectado la necesidad de introducir una mejora en el artículo 14, relativa a los formularios, de manera que se ha modificado parcialmente el párrafo 2 del artículo 14, con el fin de exigir que los formularios estén disponibles en el momento de entrada en vigor de la norma reguladora correspondiente.

*“2. Todos los modelos deberán estar disponibles desde el momento de la entrada en vigor de la norma reguladora del correspondiente procedimiento y permanentemente actualizados”.*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 14 / 15
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

En vista de todo lo anterior, esta Secretaría General informa favorablemente el presente proyecto normativo, y lo eleva para su aprobación y firma, y su ulterior remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de Ley y su envío al Parlamento de La Rioja para su tramitación reglamentaria por la Cámara.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 15 / 15

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0833109
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			